

C.A. de Temuco

Temuco, ocho de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece ALEJANDRO COX BETANCOURT, abogado en representación de Rodrigo Ñanculef Vallejos, condenado en causa RIT 640-2018, del Juzgado de Garantía de Pucón, interponiendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución emitida con fecha 19 de abril del presente año por el juez titular del Juzgado de Garantía de Pucón, don Francisco Madrid, a fin de que se restablezca el imperio del derecho, disponiendo S.S. Iltma., dejar sin efecto la resolución bajo análisis por arbitraria e ilegal, disponiendo así su revocación íntegra o las medidas correctivas que sean pertinentes.

Todo lo anterior, sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho que se expondrán a continuación:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Con fecha 13 de mayo de 2018 se desarrolla la audiencia de control de detención, en donde el Ministerio Público requiere en procedimiento simplificado a mi representado por el simple delito de manejo con sanción vigente, previsto y sancionado en el artículo 209 de la ley de tránsito en calidad de autor y grado de desarrollo consumado.

La última gestión que figura en la causa en cuestión es de fecha 29 de marzo de 2019, en donde el Ministerio Público solicita declarar en rebeldía a nuestro representado.

De acuerdo a los antecedentes que se contienen en el proceso penal en cuestión, podemos concluir que la acción penal prescribió con fecha 12 de mayo de 2023, dado que, al ser un simple delito, la prescripción es de cinco años, como bien se señala en el artículo 94 del Código Penal.

Con fecha 17 de abril del año en curso el condenado compareció a estrados mediante mandato judicial que me otorgó, solicitando la declaración de la prescripción de la acción penal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YCFXXNZVXXK

Posteriormente, en resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón de fecha 19 de abril de 2024, se pronuncia sobre la solicitud en cuestión, no dando lugar a la petición, argumentando que nuestro representado mantiene una orden de detención vigente.

En cuanto a los requisitos de la prescripción de la acción penal debemos mencionar lo siguiente:

En el Código Penal la prescripción se regula en el Título V que se denomina “De la extinción de la responsabilidad penal”, en concreto, su regulación recorre desde el artículo 94 al 103 del cuerpo punitivo.

En la especie, en estos enunciados jurídicos se nos indica los diversos requisitos, entre ellos; las distintas hipótesis de prescripción de la acción penal, como se computa, efectos en cuanto a las personas, etc. En ningún artículo del Título V del Código Penal, se puede lograr sostener que una orden de detención vigente es un requisito que deba concurrir para denegar la tramitación de declaración de la prescripción de la acción penal.

De igual forma, en la doctrina nacional cuando se desarrolla este tema, se tienen en cuenta las siguientes exigencias para la declaración de prescripción de la acción penal:

1. Plazo de prescripción: De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 95 del Código Penal, el término de la prescripción comienza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito, en concreto, la fecha sería el día 12 de mayo de 2018, como bien consta en el requerimiento efectuado por el Ministerio Público.
2. Suspensión o interrupción de la prescripción: Se entiende que en la causa en cuestión, la prescripción se ha suspendido, dado que, el procedimiento se ha dirigido en contra de nuestro representado. Debemos indicar que la prosecución se ha paralizado por más de tres años, por tanto, continúa la prescripción, como si no se hubiere suspendido, como bien se menciona en el enunciado jurídico del artículo 96 del Código Penal.



3. Determinación del plazo: Este ítem se determina en base a la tripartición de las infracciones punibles (Yuseff Sotomayor, 2005, pág.102). De acuerdo a los antecedentes ya comentados, concluimos que la acción penal prescribió con fecha 12 de mayo de 2023, dado que, al ser un simple delito, la prescripción es de cinco años, como bien se señala en el artículo 94 del Código Penal.

Finalmente, la resolución cuestionada al malentender que la orden de detención vigente es un requisito que impide solicitar la declaración la prescripción de la acción penal, la transforma en un acto ilegal y arbitrario, poniendo en peligro la libertad personal y seguridad individual de nuestro representado.

El artículo 21 de nuestra Carta Fundamental establece que la acción de amparo podrá interponerse a favor de toda persona que se encontrare arrestado, detenido o preso, con infracción a los dispuesto en la Constitución o las leyes, a fin de que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y adopte las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El inciso final del artículo 21 señala que la misma acción podrá deducirse a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. En cuanto a la idoneidad del Recurso de Amparo: La Excelentísima Corte Suprema en sentencia del 22 de abril de 2024, Rol 14469- 2024, en cuanto a la idoneidad del Recurso de Amparo para estos efectos indica lo siguiente: “Es un instrumento eficaz para el control de las resoluciones que emitan los tribunales de justicia que pongan en riesgo dichas garantías. Surge el recurso de amparo entonces, como el remedio adecuado y oportuno para poner fin a los actos y decisiones que afecten tales derechos, cuando en dichos dictámenes aparezca de manifiesto y sea ostensible que los antecedentes que le sirven de fundamento no se corresponden con el ordenamiento jurídico vigente”.



Solicita tener por interpuesto recurso de amparo a favor de mi representados Rodrigo Ñanculef Vallejos y, previo informe de la recurrida, acogerlo, declarando ilegal y arbitraria la resolución de fecha 19 de abril de 2024 ordenando se deje sin efecto inmediatamente y proceda a dar curso a la petición de esta parte sobre la solicitud prescripción de la acción penal de su representado, sin perjuicio de otras medidas que se estimen necesarias para asegurar su debida protección, restableciendo de esta forma el imperio de derecho y el resguardo de las garantías constitucionales.

Que informa Francisco Madrid Alarcón, Juez de Letras, Garantía, Familia, y del Trabajo de Pucón señalando: Que en efecto, en los autos RIT 640-2018, de este Tribunal, el 13 de mayo de 2018, en audiencia de control de detención, el Ministerio Público requirió al imputado en procedimiento simplificado, por el delito del artículo 209 inciso primero de la ley 18.290. En esa misma audiencia el imputado quedo notificado para comparecer ante la audiencia de procedimiento simplificado, conforme el artículo 395 del Código Procesal Penal, para el 19 de junio de 2018.

Dicha audiencia no se llevó a cabo por haberse dispuesto un nuevo día y hora para su realización para el 31 de julio de ese año. Sin embargo, se dispusieron sucesivas audiencias a contar de esa data, hasta que, por su no comparecencia a la celebrada el día 16 de octubre de 2018, se le despachó una orden de detención en su contra.

El imputado es detenido el 5 de enero de 2019, por lo que se dejó sin efecto la rebeldía y sobreseimiento temporal,' siendo apercibido y citado a audiencia de procedimiento simplificado para el 12 de febrero de 2019.

Luego, a esa audiencia no comparece y se ordena su detención en la referida data.

El día 23 de marzo de 2019 se decretó la rebeldía del imputado, por no haberse practicado su detención, conforme el artículo 99 letra



a) del Código Procesal Penal y su sobreseimiento temporal, por el artículo 252 letra b) del Código Procesal Penal.

Es así, que el día 17 de abril de este año, los apoderados del imputado pidieron la prescripción de la acción penal, fundado en el artículo 94 y siguientes del Código Penal y 250 letra d) del Código Procesal Penal. En el primer otrosí de la presentación pide tener por acompañado el mandato judicial de fecha 25 de marzo de 2024 en la Notaría Pública de la comuna de Pucón, donde consta la personería para actuar en representación de don Rodrigo Ñanculef Vallejos, asumiendo patrocinio y poder desde ya.

Así, el Tribunal resuelve dicha presentación el 19 de abril de 2024, e indica que atendido el estado de la causa y encontrándose el imputado RODRIGO ANTONIO ÑANCULEF VALLEJOS, con orden detención vigente, NO HA LUGAR

El tribunal cree que obra conforme a derecho al denegar la petición, puesto que no se presentó a una audiencia de procedimiento simplificado, para cuya validez, requería su presencia y se despachó la orden de detención correspondiente, cuestión que contempla el artículo 127 del Código Procesal Penal. El imputado, hoy, se encuentra rebelde, y el ser habido, habilitaría para alzar la detención y activar el procedimiento conforme al artículo 254 del Código Procesal Penal.

Luego, es cierto que la defensa del imputado ha pedido la prescripción, empero, ello no obsta a que la detención pueda ser materializada conforme se dijo, dado que no ha cesado la causal por la que se dictó el sobreseimiento temporal. Ahora bien, ocurre que lo solicitado no fue discutido en audiencia con todos los antecedentes necesarios y en presencia de intervinientes, sino en mera presentación, siendo carga de quien alega la prescripción, cumplir los requisitos

Que reconocen los artículos 93 y siguientes del Código Penal. Además, de ello es cierto que el Tribunal incluso de oficio podría, pronunciarse acerca de la prescripción de la acción penal, pero para ello el imputado debe ser habido



Conforme lo exige el artículo 102 del Código Penal.

Por último, la resolución que se pronunció acerca de la solicitud precitada era susceptible de recurso de reposición, conforme el artículo 362 del Código Procesal Penal, empero, no fue recurrida.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la acción constitucional de amparo puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por cualquiera a su nombre también en situaciones que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, distintas a las situaciones de arresto, detención o prisión, a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva ordene que se guarden las formalidades legales y adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección del afectado; lo cual guarda directa relación con la garantía constitucional del número 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

SEGUNDO: Que, de la lectura del recurso de amparo y del informe del recurrido, se desprende que la presente acción constitucional se dirige en contra de la resolución del Juzgado de letra, Garantía, Familia y Trabajo de Pucón, que en causa RIT 640-2018, no dio lugar a la prescripción de la acción penal solicitada por los apoderados del imputado

TERCERO: Que, de acuerdo del mérito del informe del Juez recurrido, queda en evidencia, que la orden detención despachada, por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones.

CUARTO: Que, es necesario considerar la excepcionalidad de la acción de amparo al momento de optar dentro de la diversidad de recursos procesales que tanto la Constitución como la Ley consagran en favor de quien pretende alzarse en contra de una resolución judicial, por cuanto como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°4965-2013, "... semejante comprensión de la acción en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YCFXXNZVXXK

análisis (recurso de amparo) supone la excepcionalidad de su procedencia si, como en el caso en análisis, se pretende atacar resoluciones dictadas por los tribunales de justicia en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo al procedimiento fijado en la ley, sobre todo si éste contempla mecanismos de impugnación de lo resuelto y que permiten al tribunal designado por el ordenamiento jurídico procesal para la resolución de los recursos que se deduzcan, el máximo grado de conocimiento sobre los hechos, con el objeto de asegurar la sujeción de lo decidido al mérito del proceso y a la ley correspondiente.”

QUINTO: Que, precisamente, ello es lo que ha ocurrido en el presente caso, en que existiendo recursos jurisdiccionales para impugnar la resolución contra la cual se deducido el presente recurso de amparo, con todo, la recurrente ha optado por la acción de amparo, generando un recurso alternativo al explícitamente establecido en autos.

SEXTO: Que, en consecuencia, no existe en la conducta del juez recurrida infracción alguna al ordenamiento jurídico que motive la procedencia del amparo solicitado, sino que, por el contrario, su actuación se encuentra apegada a la tramitación ordinaria de un proceso penal a fin de resolver conforme al mérito de éste.

Debido a lo anterior, es que el presente recurso de amparo debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, se declara: Que **SE RECHAZA**, el deducido por don **ALEJANDRO COX BETANCOURT**, en representación de **RODRIGO ÑANCULEF VALLEJOS**, en contra de don Francisco Madrid Alarcón Juez del Juzgado de letra, Garantía, Familia y Trabajo de Pucón.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YCFXXNZVXXK

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Amparo-109-2024.(jog)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YCFXXNZVXXK

Pronunciada por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez y el Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger. Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse haciendo uso de su permiso gremial.

En Temuco, a ocho de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YCFXXNZVXXK